



BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

XI legislatura · primer període · número 15 · dimarts 1 de desembre de 2015

TAULA DE CONTINGUT

4. Informació

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.30. Altres procediments davant el Tribunal Constitucional

Procediment relatiu a la impugnació de disposicions autonòmiques 6330/2015, interposada pel Govern de l'Estat contra la Resolució 1/XI del Parlament de Catalunya, sobre l'inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels resultats electorals del 27 de setembre de 2015

385-00001/11

Alegacions que formula el Parlament

3

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Concurs oposició lliure per a proveir dues places de lletrat o lletrada del Cos de Lletrats del Parlament de Catalunya

501-00001/10

Nomenament de l'òrgan qualificador

6

Aquesta publicació és impresa en paper ecològic (definició europea ECF), en compliment del que estableix la Resolució 124/III del Parlament, sobre la utilització del paper reciclat en el Parlament i en els departaments de la Generalitat, adoptada el 30 d'abril de 1990.

Els documents publicats en el *Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya* (BOPC) són una reproducció fidel dels documents originals entrats al Registre.

La numeració del BOPC no està necessàriament vinculada a una sola data.

Imprès al Parlament

ISSN: 0213-7798

DL: B-20.066-1980

www.parlament.cat

4. Informació

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.30. Altres procediments davant el Tribunal Constitucional

Procediment relatiu a la impugnació de disposicions autonòmiques 6330/2015, interposada pel Govern de l'Estat contra la Resolució 1/XI del Parlament de Catalunya, sobre l'inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels resultats electorals del 27 de setembre de 2015

385-00001/11

AL·LEGACIONS QUE FORMULA EL PARLAMENT

Al Tribunal Constitucional

Carme Forcadell i Lluís, presidenta del Parlamento de Cataluña, en representación del mismo de conformidad con el artículo 39.1 del Reglamento de la Cámara, en cumplimiento del Acuerdo de la Mesa del Parlamento de 24 de noviembre de 2015 y asistida por los Servicios jurídicos del Parlamento, representados por el secretario general en funciones y por el letrado mayor, de acuerdo con lo establecido en el artículo 82.1 de la LOTC, comparece ante el Tribunal Constitucional y como mejor en derecho proceda

Dice

1. Que, en fecha 13 de noviembre de 2015, el Parlamento de Cataluña ha sido notificado de la Providencia del Pleno de ese Tribunal de 11 de noviembre de 2015 por la que se admitía a trámite la impugnación de disposiciones autonómicas (Título V de la LOTC), número 6330-2015, promovida por el Gobierno y, en su representación y defensa, presentada por el abogado del Estado, en relación con la Resolución 1/XI del Parlamento de Cataluña, de 9 de noviembre de 2015, sobre el inicio del proceso político en Cataluña como consecuencia de los resultados electorales del 27 de septiembre de 2015 y su anexo, confiriendo un plazo de diez días para personarse en el procedimiento y formular alegaciones.

2. Que, mediante Acuerdo de la Mesa del Parlamento de fecha 24 de noviembre de 2015, cuya certificación se acompaña, el Parlamento de Cataluña ha decidido personarse en el procedimiento relativo a la impugnación de disposiciones autonómicas (Título V de la LOTC), número 6330-2015.

3. Que, evacuando el trámite conferido mediante la providencia a qué se ha hecho referencia, pasa a formular las siguientes

Alegaciones

Primera

La Resolución 1/XI, de 9 de noviembre de 2015, aprobada por el Pleno del Parlamento de Cataluña, ha sido adoptada en el ejercicio de la función de *impulso de la acción política y de gobierno* que el artículo 55.2 del Estatuto de Autonomía de Cataluña (EAC) atribuye al Parlamento, que de acuerdo con el artículo 164 del Reglamento de la Cámara (RPC) permite aprobar propuestas de resolución para impulsar la acción política y de gobierno dirigidas al Gobierno de la Generalidad y a los ciudadanos en general.

Únicamente desde este contexto concreto puede ser valorada la resolución impugnada, lo que determina también la naturaleza de la misma, su alcance y sus efectos como acto parlamentario, así como los límites que en este caso existen para poder ser considerada como un acto susceptible de control por parte del Tribunal Constitucional.

Segunda

La adopción de la Resolución 1/XI, de 9 de noviembre de 2015, expresa en sede parlamentaria el contenido del *mandato político* adquirido por los grupos parlamentarios que han ejercido la iniciativa, como consecuencia de las elecciones celebradas el pasado 27 de septiembre de 2015.

Tercera

El mandato a que hace referencia la anterior alegación se fundamenta en los programas electorales sometidos al libre ejercicio democrático del derecho fundamental de

participación política (art. 23.2 CE), programas que, de forma clara y explícita, tenían como objetivo político prioritario iniciar el proceso de creación de un estado catalán independiente. Esto implica que la Resolución 1/XI, de 9 de noviembre de 2015, adoptada por los representantes libremente elegidos del pueblo de Cataluña, se apoya directamente sobre los principios básicos de *la democracia y el pluralismo político* y obtiene su legitimación del ejercicio del *derecho de participación política* de los ciudadanos.

Cuarta

El apoyo ciudadano a estos programas electorales ha dado como resultado la configuración de un Parlamento con mayoría suficiente para iniciar este proceso, lo que ha permitido la aprobación de la Resolución 1/XI, de 9 de noviembre, por la que se declara solemnemente la voluntad de impulsar este proceso y se anuncian determinadas medidas.

Quinta

La Resolución 1/XI, de 9 de noviembre, es un acto parlamentario de naturaleza *estrictamente política*, como es consustancial a las resoluciones y a las mociones resultantes del ejercicio de la función de impulso de la acción política y de gobierno, de acuerdo con la doctrina parlamentaria. De acuerdo con esta doctrina, este tipo de resoluciones no tiene otro alcance que el de *expresar una voluntad, aspiración o deseo* de la cámara, quedando únicamente sujetas a los mecanismos de control de carácter político previstos en los reglamentos parlamentarios, en este caso el del artículo 165.4 RPC.

De acuerdo con la misma doctrina parlamentaria, claramente mayoritaria sobre esta cuestión, las mociones y resoluciones parlamentarias adoptadas en el ejercicio de la función de impulso o dirección del sistema político carecen de fuerza legal de obligar y tampoco pueden desplazar o anular, por sí mismas, la aplicación del principio de legalidad al que están sujetos el Gobierno y los ciudadanos. La fuerza externa de este tipo de actos parlamentarios se limita a una simple instrucción indicativa por la que se manifiesta más una aspiración o deseo que una disposición vinculante, porque formalmente no son parte del derecho positivo. Se trata, en definitiva, de decisiones parlamentarias que por su naturaleza se mueven en el marco de la relación política entre el Parlamento y el Gobierno o en el de la expresión de una voluntad dirigida a los ciudadanos.

Sexta

Debido al carácter político inherente a la naturaleza del acto, el Parlamento considera que la Resolución 1/XI, de 9 de noviembre, carece de los elementos necesarios para ser objeto idóneo de un proceso jurisdiccional de inconstitucionalidad y solo puede ser considerada como una *declaración* mediante la cual el Parlamento de Cataluña manifiesta una voluntad política que, en sí misma, no puede conculcar el marco constitucional y estatutario al no prohibir éste la *expresión* y la defensa de proyectos políticos no coincidentes con la Constitución.

Séptima

La Constitución española vigente *no prohíbe ni establece límites al debate político*, especialmente a aquel que se produce en sede parlamentaria, aun cuando se dé una discrepancia entre el proyecto o idea que se debate y el contenido de la Constitución. Como ha señalado reiteradamente el Tribunal Constitucional, la Constitución misma ampara el derecho de promover y defender cualquier proyecto político, incluso de los que no coincidan o encajen con los postulados constitucionales vigentes, porque ese derecho tiene su fundamento en el *principio democrático y es libre en su contenido y alcance* si se formula pacíficamente, con respeto a los derechos fundamentales y por medios políticos. Esta doctrina se recoge en la STC 42/2014, de 25 de marzo, sobre la Resolución 5/X del Parlamento de Cataluña, y queda claro, por tanto, que también es aplicable al debate político que se realiza en el ámbito de un parlamento autonómico.

Octava

Tal y como ha reconocido repetidamente el Tribunal Constitucional, el ordenamiento constitucional no responde a un modelo de *«democracia militante»* que imponga a las instituciones públicas representativas un deber de adhesión positiva a dicho ordenamiento, de manera que la sola pretensión o posibilidad de afectarlo convierta en anti-jurídica la expresión de una voluntad política discrepante o incompatible.

Novena

Una resolució de la naturalesa de la Resolució 1/XI, de 9 de novembre, no té capacitat de produir cap infracció constitucional atès que la voluntat que expressa no s'ajusta al marc constitucional, perquè *carece del elemento de juridicidad* necessària per infringir-lo. La naturalesa d'acte d'impuls polític fa que els seus efectes es despleguen, com ja s'ha dit, en l'àmbit propi de les relacions entre el Parlament i el Govern, sense generar tampoc cap classe d'obligacions o drets per als ciutadans. La Resolució 1/XI, de 9 de novembre, és, i no és res més que una declaració de voluntat i d'intencions perquè aquest és l'únic abast que pot tenir com a acte d'exercici de la funció d'impuls de l'acció política i de govern.

Décima

Per aquests motius el Parlament de Catalunya considera que la doctrina establerta amb ocasió de la Sentència del Tribunal Constitucional sobre la *Declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña* (Resolució 5/X, de 23 de gener de 2013), que reconeix la possibilitat que les relacions parlamentàries d'impuls polític puguin produir efectes jurídics, atès que aquests no són vinculants, ha de ser necessàriament *replanteada y revisada* en benefici del reconeixement de la plena capacitat que ha de reconèixer-se al Parlament de Catalunya d'expressar el pluralisme polític de la societat i la voluntat majoritària que representa, especialment quan aquesta voluntat s'ha expressat de forma clara i inequívoca mitjançant un procés electoral en el qual el projecte polític al qual se refereix la resolució ha constituït l'*eje central e indiscutible* de la voluntat expressada per als ciutadans de Catalunya mitjançant l'exercici del dret de sufragi universal, lliure i directe.

El Parlament entén que la doctrina establerta en la STC 42/2014, de 25 de març, no és coherent amb el sistema de responsabilitat i de control que el dret parlamentari estableix respecte de les resolucions i mocions parlamentàries, que es fonamenta exclusivament en un control polític segons el previst en els reglaments de les cambres. D'acord amb aquest sistema, el incompliment d'aquests actes mai és demanable jurídicament, perquè per això el seu control només pot verificar-se a través dels mecanismes propis de la relació de confiança política entre el Parlament i el Govern.

En canvi, sí resulta coherent aplicar la doctrina establerta en la STC 180/1991, de 23 de setembre (FJ 2), que dona el seu just valor a la naturalesa política d'aquests actes parlamentaris i a la seva especial forma de control i que extrau com a conclusió que, encara que en el cas de que els òrgans administratius decideixin seguir les instruccions d'una moció o resolució, això no converteix a aquests actes parlamentaris en actes impugnables davant el Tribunal Constitucional. També la doctrina continguda en l'ATC 135/2004, de 20 d'abril (FJ 6 i 8), que exclou del control per la via de l'article 161.2 CE els actes parlamentaris de tràmit i aquells altres que conclouen en una resolució o acte que no s'integra en l'ordenament i que insisteix en el principi general de que el debat parlamentari és absolutament lliure en el seu contingut i també en les seves conclusions si aquestes es formalitzen en textos sense valor normatiu.

Undécima

La reconsideració de la doctrina continguda en la STC 42/2014, de 25 de març, resulta indispensable per preservar l'equilibri entre les institucions, de manera que es garanteixi al Parlament exercir les funcions que li atribueix el marc constitucional i estatutari, sense que el Tribunal Constitucional pugui interferir en les mateixes quan aquest exercici *carezca del requisito necesario de juridicidad* que el legitima, ja que, si no fos així, seria tant com admetre l'existència d'un control sobre el mateix exercici lliure de la funció parlamentària d'impuls polític, amb el resultat inevitable i constitucionalment censurable d'extendre la jurisdicció del Tribunal Constitucional a un àmbit que, d'acord amb el principi democràtic i el dret a promoure i defensar projectes polítics en sessió parlamentària, ha de quedar-li vetat.

El Parlament té l'obligació d'insistir en aquest aspecte crucial i demanar al Tribunal Constitucional l'aplicació del «*self-restraint*» necessari per assegurar que no s'extralimiti i invadi l'esfera pròpia de l'actuació del Parlament. Està en joc

aquí una de las cuestiones capitales que se plantean en el Estado constitucional contemporáneo, cual es la *relación entre la justicia constitucional y la representación popular*, ya que a nadie escapa que una progresiva ampliación del control judicial sobre el poder político entraña el riesgo de suplantar el poder de los representantes del pueblo por el gobierno de los jueces. Riesgo que pone en evidencia la distinta legitimación de ambos poderes y que debe evitar siempre el solapamiento del Tribunal Constitucional sobre el Parlamento cuando se trata de actos políticos, puesto que este último goza de una legitimidad democrática que no es equiparable a la legitimidad del Tribunal Constitucional.

Duodécima

Todo lo manifestado conduce necesariamente a la inadmisión de la impugnación por falta de objeto idóneo de un juicio de inconstitucionalidad, ya que los fundamentos del sistema constitucional y parlamentario obligan a *distinguir* el significado y alcance de la Resolución 1/XI, de 9 de noviembre, en tanto que acto de impulso político, de las iniciativas parlamentarias o administrativas que eventualmente puedan derivarse de la misma y que, por su naturaleza, tengan capacidad para producir los efectos jurídicos necesarios para justificar, en su caso, la intervención del Tribunal Constitucional.

El mero riesgo de que estas iniciativas puedan tener conexión con la resolución impugnada nunca puede ser utilizado para judicializar ésta a modo de control preventivo, confundiendo los diferentes planos en que operan cada una de ellas y trasladando indebidamente el juicio de constitucionalidad a un acto de estricta naturaleza política que, como tal, carece de los elementos necesarios para poder ser objeto idóneo de ese juicio.

Por todo lo anterior, al Tribunal Constitucional

Solicita

Que tenga por presentado este escrito junto con la certificación que lo acompaña, por personado al Parlamento de Cataluña en la impugnación de disposiciones autonómicas número 6330-2015, por formuladas las anteriores alegaciones, y de acuerdo con ellas dicte sentencia por la que se **declare la inadmisibilidad de la impugnación de la Resolución 1/XI por ser un acto no idóneo para ser sometido a un procedimiento de constitucionalidad** ante el Tribunal Constitucional por razón de su naturaleza política y en tanto que expresión de una voluntad parlamentaria basada en el principio democrático y en el ejercicio político del pluralismo político.

Barcelona para Madrid, a 26 de noviembre de 2015

Carme Forcadell i Lluís, presidenta del Parlamento de Cataluña; Pere Sol i Ordis, letrado secretario general (e.f.); Antoni Bayona Rocamora, letrado mayor

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Concurs oposició lliure per a proveir dues places de lletrat o lletrada del Cos de Lletrats del Parlament de Catalunya

501-00001/10

NOMENAMENT DE L'ÒRGAN QUALIFICADOR

Acord: Mesa del Parlament, 24.11.2015

Secretaria General

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 24 de novembre de 2015, vist l'informe del director de Govern Interior i de conformitat amb la base sisena del concurs oposició lliure per a proveir dues places de lletrat o lletrada del Cos de Lletrats del Parlament de Catalunya (tram. 501-00001/10), ha designat per tal de formar part del tribunal qualificador d'aquest concurs els membres següents:

Membres titulars:

Carme Forcadell i Lluís, presidenta del Parlament, com a presidenta del tribunal
Pere Sol i Ordis, secretari general del Parlament (e.f.)

Francesc Pau i Vall, lletrat del Parlament, a proposta del Consell de Personal del Parlament

Antoni Pigrau i Solés, catedràtic d'universitat de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals, a proposta de la Universitat Rovira i Virgili

Albert Conesa i Bausà, advocat i secretari tècnic del Consell de Col·legis d'Advocats de Catalunya, a proposta del Consell de Col·legis d'Advocats de Catalunya

Membres suplents:

Lluís Corominas i Díaz, vicepresident primer del Parlament, com a suplent de la presidenta

Antoni Bayona i Rocamora, lletrat major del Parlament, com a suplent del secretari general

Anna Casas i Gregorio, lletrada del Parlament, com a suplent del funcionari nomenat en representació del personal del Parlament

Gonzalo Quintero i Olivares, catedràtic d'universitat de Dret Penal, com a suplent del professor proposat per la Universitat Rovira i Virgili

Marta Alsina i Conesa, advocada i membre de la Junta de Govern del Col·legi de Girona, com a suplent del professional proposat pel Consell de Col·legis d'Advocats de Catalunya

De conformitat amb el que disposa l'article 53.2 dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya, el director de Govern Interior del Parlament actuarà com a secretari del tribunal, amb veu i sense vot.

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2015

Pere Sol i Ordis, secretari general (e.f.)
